Historia social de la acción colectiva urbana: Los pobladores de Santiago, 1957-1987*

Vicente Espinoza**

Summary

What does characterize the collective action of Santiago's pobladores *from 1957 to 1987 as the action of a social movement? I propose an analytical framework of four orientations that organize the collective action of* pobladores*: negotiation of urban rights, institutional participation, community action and revolutionary politics. The history of this urban social movement yields different hierarchies of these elements in the organization of its action.*

Early land seizures are a negotiation of rights supported by an active community; this nuclei subordinates the relationship to the institutions of the political system. In the years of populism the state initiative tied to a myriad of community organizations outshines the negotiation of rights that, at some point, shows its links to revolutionary politics. In the days of Allende, pobladores *channel their negotiation of rights to an institutional arena that pervaded community life; revolutionary politics is somewhat isolated from the mainstream. In the eighties, the negotiation of rights and institutional participation are in crisis and community life appears closer than ever to revolutionary politics.*

Resumen

El artículo analiza la acción colectiva de los pobladores de Santiago entre 1957 y 1987 desde la perspectiva sociológica de los movimientos sociales. Las categorías del análisis remiten a cuatro familias de acción colectiva: acción reivindicativa, participación institucional, acción comunitaria y lógica de ruptura. El artículo muestra que las características del movimiento social en los períodos analizados corresponden a articulaciones particulares de estas orientaciones a la acción.

El período de las primeras ocupaciones de terrenos está dominado por una lógica puramente reivindicativa, que subordina la participación institucional y se apoya en la comunidad. En el período de la promoción popular la iniciativa institucional y política se articula con la organización comunitaria, a la vez que intenta canalizar la acción lógica reivindicativa, mientras que esta última se vincula con acciones rupturistas. Durante la Unidad Popular el movimiento está dominado por la asociación de una lógica reivindicativa y la mantención de la institucionalización, cuya expresión típica son los campamentos. La acción comunitaria pasa a un segundo plano, mientras que la lógica de ruptura no se articula con los elementos anteriores. La acción de los pobladores en los 80 se organiza sobre la base de la crisis de la acción reivindicativa y la institucionalización; la prioridad otorgada a los sentimientos comunitarios se acerca, de forma minoritaria pero real, a las fuerzas de ruptura revolucionaria.

* Parte del análisis que se presenta en este artículo fue publicada por L'Harmattan (Dubet *et al.* 1989). Mi recuerdo y agradecimiento a todos quienes participaron en los grupos de discusión de la *intervención sociológica*, especialmente a los dirigentes de pobladores.

** Sociólogo, Investigador. Instituto de Estudios Avanzados. Universidad de Santiago. vespinoz@rdc.cl

I. Presentación

Esta presentación se enfoca sobre treinta años de la historia reciente de los pobladores, entre 1957 y 1987, que corresponden al inicio de los conflictos por acceso a la tierra urbana hasta las protestas de mediados de los ochenta. Estos hechos no marcan sólo el nacimiento de un grupo, sino que su paso a la acción colectiva. Diversos hechos permiten ilustrar los períodos que encadenan esta historia: en primer lugar, "la toma de La Victoria", seguida por el dominio de la iniciativa pública en el desarrollo de grandes poblaciones en Santiago; después, las ocupaciones de terrenos que muestran un alto nivel de acción reivindicativa dentro de una relación de conflicto negociado con el Estado; finalmente, entramos al final del período, marcado por la acción comunitaria y las protestas.

El objetivo del artículo es presentar una reconstrucción sociológica de parte de la historia de los pobladores siguiendo categorías de interpretación elaboradas a partir de la intervención sociológica desarrollada en Santiago a mediados de los 80 (Dubet *et al.*, 1989). La intención es destacar períodos específicos y concebirlos como modos de articulación particular de los componentes de la acción destacados por la investigación de los movimientos sociales de pobladores. Las categorías de análisis que permiten sintetizar treinta años de la historia de los pobladores tienen sentido en el debate intelectual ya sea que se las considere actualmente válidas o superadas. Las categorías propuestas para el análisis constituyen un punto de referencia insoslayable ya que representan la cristalización de un sentido histórico de la acción colectiva. En otra parte he mostrado su consistencia en análisis posteriores al período que se aborda aquí (Espinoza, 1993).

A. Familias de acción colectiva

Las categorías utilizadas en este análisis provienen de un estudio de dirigentes de pobladores llevado a cabo en 1985 y 1986 utilizando la metodología de la intervención sociológica. A través de esta investigación fue posible establecer las orientaciones a la acción predominantes entre los dirigentes sociales de los pobladores (Dubet *et al.*, 1989). Según este marco, hay dos ejes que constituyen el principio de organización de las orientaciones entre los pobladores: su identidad social y su distancia de la institucionalidad política. La combinación de estas categorías da origen a un sistema de acción que mezcla cuatro familias de movilización social.

La identidad de los pobladores no responde a un principio único; aunque el rasgo principal sea la exclusión, el término tolera un rango de definiciones que van desde la clase (por referencia estructural al sistema económico) hasta términos más amplios como pueblo o comunidad (por referencia a pautas de sociabilidad). La experiencia de vida de los pobladores se compone, de una parte, con elementos de exclusión: falta de acceso al consumo, bloqueo a la movilidad social o ausencia de integración. Pero de otra parte incluye también elementos de explotación: cesantía, precariedad en el empleo o desregulación de las relaciones laborales. Ni explotado ni pobre sintetizan bien la experiencia de los pobladores. Pese a la exclusión en que se encuentran los pobladores, ello no deriva automáticamente a la búsqueda de la ruptura del orden social ante la imposibilidad de integración.

A partir de los ejes de identidad y distancia institucional puede establecerse un sistema de acción colectiva compuesto de cuatro familias que se presenta en el Esquema 1. Las filas presentan principios de identidad y las columnas las estrategias de relación con el entorno social. Al interior de cada cuadrante se presentan la denominación habitual del actor, su forma de acción más típica y su referencia de orden social ideal. Cada uno de los cuadrantes tolera una escala o rango de definiciones que será abordado en el análisis histórico; por ahora, presentemos sintéticamente los principios que organizan la acción.

La orientación de tipo reivindicativa surge de una combinación de la identidad de clase con la confianza en el sistema institucional. Ella puede presentarse como una formulación de las necesidades en términos de derechos. Si la pobreza deviene injusticia social, desde aquí es fácil desprender la responsabilidad del sistema político en la solución de estos conflictos. Esta orientación se inscribe con propiedad en los rangos de la acción del sindicalismo chileno (Campero y Valenzuela, 1984). Entre los pobladores, esta orientación corresponde plenamente con las movilizaciones del tipo "toma de terrenos" que se dieron en Chile en los años 60 (Espinoza, 1988). Las tomas realizadas durante los años 80 fueron

Esquema 1

ORIENTACIONES A LA ACCION ENTRE LOS POBLADORES

	ESTRATEGIA	
	Participación	*Autonomía*
Identidad Clasista	Trabajadores Reivindicación Estado bienestar	Explotados Revolución Dictadura proletaria
Identidad Popular	Ciudadanos Negociación Democracia	Comunidad Testimonio Solidaridad

más bien intentos fallidos ante la imposibilidad de los pobladores para abrir canales de institucionalización del conflicto.

Precisamente, el cierre de los mecanismos de institucionalización del conflicto abrió la compuerta a una orientación de tipo revolucionaria entre los pobladores. La militancia revolucionaria y la acción reivindicativa comparten la referencia económica en la definición de su identidad, pero los diferencia el grado de confianza en los mecanismos institucionales. Mientras los dirigentes reivindicativos buscan negociar los intereses de sus representados, los revolucionarios actúan desde la base social para crear su propio orden político, concebido como expresión de los intereses anticapitalistas del proletariado.

La identidad de los pobladores puede también expresarse en términos no clasistas: ciudadano, pobre, gente, o pueblo, reflejan mejor la visión que muchos pobladores tienen de su condición. Aun cuando puede aparecer el deterioro de la confianza en los mecanismos de integración, ella da origen a una orientación de tipo comunitaria. En una comunidad todos tienen cabida; los une el ser los desheredados y la voluntad de vivir un orden solidario. Posiblemente las comunidades religiosas son las que mejor expresen esta orientación, aunque también es posible encontrarla en experiencias de organizaciones laicas (Martínez y Valenzuela, 1986; Razeto, 1990).

Una identidad social no clasista se aviene perfectamente con expectativas de mayor participación política. El juego político debiera permitir la integración de los grupos sociales postergados. La integración puede asumir diversos matices, ya sea desde la participación directamente política hasta las relaciones fundadas en la distribución clientelista de beneficios por el Estado. La participación en el sistema político es uno de los campos donde los pobladores miran con más recelo. La referencia a la política evoca inmediatamente la manipulación de sus intereses inmediatos por agentes extraños.

Las orientaciones descritas coexisten por décadas entre los pobladores sin llegar a constituirse en movimiento social ante la imposibilidad de resolver en un proyecto las tensiones inherentes a la combinación de cada una de estas orientaciones a la acción. Las dificultades para constituir un proyecto expresan ni más ni menos que la fluidez de las relaciones que subyacen la vida social de los pobladores. Un tipo de relaciones sociales puede identificarse en cada una de las orientaciones a la acción que tensionan al movimiento (Dubet *et al.*, 1989). Hay trabajadores sindicalizados entre los pobladores, como ciertamente hay cesantía y empleo precario; hay fuertes lazos comunitarios junto con búsqueda de movilidad social; hay marginación del sistema de decisiones pero también participación en la vida política. El problema parece residir en que los pobladores son un poco de cada uno: ni clase ni comunidad puras, ni totalmente excluidos pero tampoco integrados (Dubet *et al.* 1989).

El análisis histórico ofrece la posibilidad de hacer operar las categorías propuestas en el análisis de situaciones concretas. De esta forma enriquece las definiciones de cada orientación, pero permite también abordar el problema de la transformación de la acción colectiva en movimiento social. Mostraremos cómo cada uno de los casos elegidos corresponde a combinaciones particulares de elementos, donde frecuentemente una de las familias de acción subordina a las restantes. Esperamos de esta forma aportar a la teoría de los movimientos sociales.

II. La toma de La Victoria (1)

Según las cifras del censo de 1952, Santiago se acercaba al millón y medio de habitantes; su población casi se había duplicado en los veinte años previos. Este crecimiento provenía princi-

palmente de la migración interna campo-ciudad, y está asociado con el impulso a políticas de industrialización que tendieron a concentrar la población en unos pocos centros urbanos, pero que convergía principalmente hacia la capital. Ya en los años cincuenta, Santiago representaba el 40% de la población urbana del país, y se había convertido a la vez en centro industrial, centro político y administrativo, así como mercado local y reserva de mano de obra.

El enorme crecimiento demográfico de Santiago provocó una crisis urbana por la carencia de viviendas, servicios, y la desorganización general de la ciudad tuvo importantes consecuencias para los sistemas de producción de viviendas y la organización general de la ciudad. Hasta los años cuarenta, los sectores populares tendieron a localizarse en áreas centrales en deterioro, ya sea en conventillos o cités (2). No obstante, la densificación de áreas centrales no fue suficiente como para proveer vivienda a toda la población que se incorporaba a la ciudad y un sistema de loteos privados urbanizó terrenos agrícolas adyacentes a la ciudad. Entre 1940 y 1952 el área residencial del gran Santiago creció en un 40% y sólo dos de las 17 comunas que componían la ciudad conservaron su carácter rural.

La transformación de suelo agrícola en tierra urbana es un proceso predominante de esta época y los más pobres ocupaban ilegalmente algunos terrenos para construir habitaciones precarias conocidas como "callampas" (Sabatini, 1982; Valdés, 1983). Las condiciones de vida eran de las más difíciles en estas "tierras de nadie", cercanas a bordes de ríos de crecidas brutales, ubicadas en laderas de cerros con insalubres basurales, sitios eriazos desconectados de la trama vial.

Estos asentamientos dispersos son las respuestas individuales de los más pobres a su necesidad habitacional. No se trataba de una acción concertada, sino que de la iniciativa de algunas familias se establecían en un terreno hacia el que convergían poco a poco su parentela y sus amigos. Las familias no cuentan con la aprobación de los propietarios y no se preocupan mucho de la legalidad de su instalación. Hacia 1959, treinta mil familias, unas 150 mil personas, constituían el universo de "callamperos"; es decir 8% de la población del gran Santiago (Valdés, 1983).

El 30 de octubre de 1957, un grupo de pobladores de la miserable callampa "El Zanjón de la Aguada" organizó la toma de terrenos que dio origen a la población "La Victoria". La ocupación de tierras buscaba esencialmente resolver un problema de vivienda, y la toma de La Victoria sigue al incendio que había destruido las viviendas de unas doscientas familias de El Zanjón. La iniciativa no está vinculada en ningún caso con procesos reivindicativos mayores ya sea de pobladores, sindicalistas o partidos políticos, aunque los militantes políticos o sindicales ocupan siempre un lugar destacado en los recuerdos. Los políticos eran parte de su vida cotidiana antes que lejanos representantes en el sistema político.

Los pobladores piden al Estado una ayuda para construir ya que se negaban a volver para El Zanjón. El objetivo es por lo tanto obtener el reconocimiento de la ocupación por las autoridades, a fin de obtener el apoyo a la construcción. Este movimiento, en nada político, se sitúa inevitablemente de golpe en el terreno de una negociación con el Estado.

A la lógica reivindicativa, conviene agregar la dimensión comunitaria de la acción, que asegura la cohesión del grupo, su fuerza principal, con los lazos familiares que unen los pobladores durante este período, así como la experiencia común de ser "los del Zanjón". El peor enemigo de los pobladores no es aquí ni el Estado, ni los propietarios, ni otro grupo social, sino que el individualismo y todo lo que pueda quebrar la cohesión del grupo. Los objetivos de esta acción eran extremadamente concretos y limitados, pues se trataba de habitar y mantener la ocupación, antes que pesar sobre el sistema de poder urbano. Antes que la construcción misma de las viviendas hacía falta construir el grupo y en la mayor parte de las callampas se formaban comités de pobladores que se esforzaban en organizar la vida colectiva por medio de rifas, bailes, campeonatos deportivos... Ellos buscaban así reunir los fondos necesarios para obtener electricidad, agua potable y alumbrado público. La actividad reivindicativa y la cohesión comunitaria están estrechamente ligadas.

Los comités de pobladores se habían esforzado por negociar con los correspondientes aparatos del Estado, especialmente la Corporación de la Vivienda (CORVI), en vistas a obtener su trasla-

do desde las callampas hacia zonas urbanizadas, o para establecerse en poblaciones. En esta negociación, los únicos adversarios son aquellos "que no cumplen sus promesas" y los que buscan dividir el grupo. En lo que tienen que ver con las viviendas mismas, los pobladores declaran que ellos "resolverán el problema por sus propios medios". Una vez que la ocupación fue aceptada, sólo querían "que nos dejen tranquilos, con nuestras propias fuerzas construiremos nuestros hogares". Los pobladores de La Victoria, que simbólicamente habían plantado la bandera nacional en medio del terreno, piden simplemente al Estado que ratificara la ocupación de terrenos y abra créditos de construcción a los ocupantes.

A pesar del deseo de autonomía y el voluntarismo de los pobladores, la acción emprendida pasa inmediatamente a una negociación con el Estado, ya que es el Estado quien puede reconocer o rechazar la ocupación de tierras y el que, a continuación, puede favorecer o no la instalación de la población. Muy rápidamente, las relaciones con el Estado o la administración municipal son mediadas por los partidos políticos y diversas organizaciones como el grupo católico "Hogar de Cristo" o los parlamentarios de la coalición izquierdista FRAP (Frente de Acción Popular). Grupos de estudiantes de medicina y arquitectura aportan también su ayuda.

Una vez completado el gesto inicial de la toma, los pobladores están lejos de hallarse separados del sistema institucional: este gesto reivindicativo sanciona también la entrada de los marginales al mundo de la negociación institucional. La toma aparece como un reconocimiento de ciudadanía, una forma de hacerse notar, pero también de entrar en forma limitada y dependiente en la escena política. Los lazos con la CORVI, organismo estatal encargado de expropiar las zonas abiertas a la urbanización, son particularmente densos. Pero las promesas no siempre se mantienen y las relaciones entre los pobladores y la burocracia se degradan a menudo. Así, después que el presidente González Videla fuera al Zanjón para poner la primera piedra de un conjunto de viviendas de emergencia, los ingenieros de la Caja de la Habitación rechazaron los permisos de construcción. En lo sucesivo, los pobladores mantendrían una capacidad de acción autónoma sin engancharse totalmente en un relación clientelista con los gobiernos, aunque los aparatos del Estado son su interlocutor principal.

La negociación no está desprovista de conflictos una vez que se hubo consumado la ocupación de los terrenos y los pobladores se apoyaron en partidos de izquierda que interpelaban al Presidente de la República; por medio de su opinión, los partidos hicieron presión sobre los aparatos del Estado. Del lado de la Iglesia, la estrategia es la misma: el grupo Hogar de Cristo se encarga de construir sobre los terrenos ocupados y varios de sus militantes son arrestados; el Cardenal Caro, cuyo nombre lleva otra gran población, debe intervenir directamente ante el Presidente. A fines de los años cincuenta, la relación entre los pobladores y el estado no se inscribía dentro de un tipo de regulación estable y las luchas poblacionales aparecen frecuentemente como conflictos de "instalación" por medio de los cuales los pobladores se hacen reconocer como interlocutores.

Los partidos de izquierda, principalmente el Partido Comunista, ilegal desde 1948 y en oposición radical con el gobierno, se esfuerza por impulsar estas reivindicaciones de base al descubrir en los pobladores un nuevo actor de oposición: "debe elevarse el nivel político y dirigir por el buen camino a esta nueva masa que irrumpe en la vida social" declara el Partido Comunista en 1957. Los partidos de izquierda no pusieron ciertamente a todos los pobladores en "el buen camino", pero sí tuvieron un éxito indiscutible en el apoyo de la ocupación donde Salvador Allende, el candidato presidencial del FRAP, fue calurosamente recibido. Estos partidos se esforzaban por participar en las luchas reivindicativas que ellos invitaban a desarrollar, al mismo tiempo que contribuir a acrecentar la institucionalización de estas reivindicaciones.

En resumen, frente a lo que aparece sobre todo como una crisis urbana, la lógica que domina este período inicial es la de la reivindicación. La participación institucional que se manifiesta entonces es menos el objetivo de las luchas que un medio de satisfacer la reivindicación. El apoyo aportado por los partidos, particularmente los de izquierda, acompaña el levantamiento de ciertos bloqueos institucionales, pero ellos no deben hacer creer que se inscriben en un modelo general de lucha de clases en las que el "frente" de pobladores se reuniría con los obreros; y aunque los pobladores mismos son obreros, la lucha sindical y la de los pobladores permanecen relativamente lejanas. En fin, la afirmación comunitaria

acompaña la reivindicación, ella es la dimensión expresiva, ella es un recurso importante de la acción, pero ella no es por sí sola el objetivo de la lucha.

III. La promoción popular

En los años sesenta, la población del gran Santiago superó los dos millones de habitantes, acercándose a los tres millones en 1970. En los asentamientos de los sectores populares la precariedad habitacional aumentaba a la par que su población (Mercado *et al.*, 1970). En 1966, según datos de DESAL, unas 300.000 personas, vale decir el 12 por ciento de la población de Santiago, vivían en conventillos callampas o mejoras; en 1970 esta cifra alcanzó 16 por ciento. A pesar del desarrollo económico, la crisis urbana estaba lejos de haberse resuelto; entretanto, la intervención del Estado crecía para proveer los terrenos y los medios para la construcción; se pasa de 7.000 viviendas por año antes de 1959 a 20.000 unidades en 1960. Se crean así grandes poblaciones como la José María Caro, Lo Valledor y João Goulart que acogieron buena parte de la población de Santiago en inmensos barrios. En estos años, el impulso estatal a la construcción de viviendas constituía uno de los principales mecanismos de intervención pública en la economía. Los gastos públicos de salud, educación, ayuda social aumentaron igualmente durante este período. El gobierno de Alessandri, de orientación radicalmente conservadora, desarrolló una política de acceso a la propiedad, pero es con el gobierno de Frei y la llegada al gobierno de la democracia cristiana que se pone en marcha un vasto programa de "Promoción Popular".

El programa de "promoción popular" está al centro de una política de integración y participación social dirigida por el Estado y el partido dominante. El programa ideológico asociado a esta política proclamaba las virtudes de la comunidad popular capaz de llevar a cabo la autoconstrucción de sus viviendas y la organización de sus condiciones de vida. Con la promoción popular de Frei no se trataba por lo tanto de responder solamente a la crisis habitacional, sino que también realizar una activa política nacional-populista sin poner en tela de juicio las estructuras de la sociedad chilena. La política de vivienda debía mantener la actividad económica, responder a reivindicaciones urgentes y acrecentar la integración institucional de los marginales urbanos.

La racionalización administrativa del manejo de los programas habitacionales, que culminó con la creación del Ministerio de la Vivienda en 1965, cambió las formas de relación entre pobladores y Estado. Anteriormente las relaciones entre los pobladores y la administración pública estaban basadas en contactos, recomendaciones, amistades o compadrazgos, por no decir clientelismo, a fin de obtener una posición ventajosa en las listas de postulación a programas públicos. La nueva política modificó considerablemente los lazos con el aparato público; desaparecieron organizaciones mediadoras como el Frente Nacional de la Vivienda, las relaciones con los aparatos administrativos fueron individuales, la asignación de viviendas se hizo sobre la base de criterios técnicos. La reivindicación colectiva debía entonces ser marginada o canalizada políticamente.

La elaboración de políticas urbanas es un proceso político que ocurre dentro del "Estado de compromiso", en parte porque el parlamento toma decisiones, y también porque los partidos juegan un papel fundamental de mediación en el tratamiento de los problemas de acceso a la vivienda. El eje de la rivalidad política es la conquista de capas nuevas que se integran a la vida nacional y, en tal competencia, la democracia cristiana en el gobierno estaba bien ubicada. Ella adopta un estilo nuevo que la distingue tanto de la derecha tradicional como de la izquierda clasista y obrerista, por un modernismo que parecía capaz de mejorar sensiblemente las condiciones de vida de los pobres. Ella busca también contrabalancear la influencia de la izquierda en los sindicatos gracias al apoyo de los pobladores que serán, junto con los campesinos, el símbolo del apoyo popular al gobierno de Frei.

La promoción popular multiplicó las organizaciones comunitarias por las que se extendieron las redes clientelistas hasta las poblaciones. Entre 1964 y 1970 se crearon 3.487 juntas de vecinos y se encontraban en funciones 9.000 centros de madres, con 450 mil socias (Duque y Pastrana, 1972). Estas organizaciones fueron el vínculo entre la vida asociativa comunitaria y la vida política, al canalizar las reivindicaciones. Estas organizaciones se desarrollan sobre todo entre los que habían tenido acceso a vivienda en las nue-

vas poblaciones. Ellos recibían y distribuían la asistencia del Estado, al mismo tiempo que eran medios eficaces de participación política. Estas organizaciones, según el artículo 35 de la Ley de Juntas de Vecinos, eran controladas por el gobierno. La ideología democratacristiana no era simplemente la máscara del control político sobre nuevas capas sociales pues, bajo la dependencia estatal, la actividad comunitaria conoció un desarrollo considerable y los pobladores participaron, si bien de forma sesgada, en la vida pública. Se sabe que esta política de asociación entre la vida comunitaria y el acceso al Estado sigue siendo hasta hoy un punto de referencia privilegiado por los pobladores.

Por importante que sea, el esfuerzo emprendido no logró resolver la crisis habitacional (Palma y Sanfuentes, 1979). Además la ideología y las organizaciones preconizadas por el estado dieron lugar a una demanda que la sociedad no podía absorber. Sobre esta frustración se insertó la influencia de los partidos de izquierda. Hasta entonces habían concentrado sus esfuerzos en el dominio sindical, en gran medida descuidando la acción comunitaria en las poblaciones (Vanderschueren, 1971a, 1971b). Con la promoción popular de la democracia cristiana, la izquierda arriesgaba no alcanzar el apoyo de un actor que le parecía "naturalmente" adquirido. La izquierda criticaba el paternalismo de la democracia cristiana y de la ley de juntas de vecinos, en la que descubre ciertos rasgos "fascistas". Pero ella abandona poco a poco esta política para adoptar la línea de "oposición responsable" propuesta por el Partido Comunista, consistente en aceptar ciertas iniciativas del gobierno en favor del sector popular, lo que equivalía a reconocer su éxito. La izquierda se esfuerza entonces en radicalizar la acción de las organizaciones comunitarias y sobre todo de organizar la acción reivindicativa de quienes no se habían podido beneficiar de las políticas públicas. Esta estrategia se apoyaba sobre el déficit de la oferta, así como la lentitud y retardos del proceso de institucionalización.

Durante los años sesenta las luchas de los pobladores pierden su fuerza reivindicativa autónoma y se mezclan con la política nacional-populista de la promoción popular. Este movimiento, vinculado al Estado y dependiente de los partidos políticos, no se reduce simplemente al clientelismo debido al considerable desarrollo de las organizaciones comunitarias; éstas son las que mejoran las condiciones de vida y contribuyen muy fuertemente a constituir la identidad colectiva de un actor.

IV. El poder popular

Desde 1967, se debilitó el élan de la política social del gobierno democratacristiano del presidente Frei. El crecimiento económico se agotó, la inflación aumentó, la política de austeridad topaba con una viva resistencia sindical y los elementos disidentes en la democracia cristiana desarrollaron la tesis de una "vía no-capitalista de desarrollo". Como lo subraya Garretón (1983), el capitalismo enfrenta una crisis de legitimidad. Las elecciones municipales registraron un incremento en la votación de la izquierda. El presidente Frei hablaba de la situación nacional como una "crisis institucional". La izquierda confía en ganar las elecciones presidenciales y entonces se desarrolla una extrema izquierda con la participación destacada del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). La oposición piensa poder llevar a cabo el proyecto que la democracia cristiana no pudo realizar carente de participación popular y conciencia política en las masas.

Entre 1967 y 1972 las luchas de los pobladores escapan al control institucional; las tomas, las ocupaciones de terrenos se multiplican: se cuentan 312 tomas de terrenos, que involucraban 54.710 familias (Duque y Pastrana, 1972). Estas ocupaciones ocurren en Santiago y las grandes ciudades de provincia, afectando terrenos intersticiales del tejido urbano así como los terrenos agrícolas adyacentes. La fisonomía de las ciudades se transformó brutalmente con la aparición de estos nuevos asentamientos precarios denominados "campamentos".

Estas ocupaciones son siempre respuestas inmediatas y concretas a la falta de vivienda. Con el gobierno de la Unidad Popular, a partir de 1970, los esfuerzos crecientes del gobierno en favor de la construcción de viviendas populares no pudieron responder a la demanda y las tomas continuaron. La política permisiva del gobierno en este terreno, acorde con la prioridad entregada a la participación popular, hizo de las ocupaciones de terrenos una de las formas dominantes de acceso a la vivienda. Los sociólogos que estudiaron estos fenómenos describían los campamentos

como una situación transitoria que debía regularizarse poco a poco adecuándose a las normas de vivienda de las poblaciones de Santiago a través de reivindicaciones y la obtención de equipamiento urbano (Equipo CIDU, 1972a; Castells, 1973; Vanderschueren, 1971b). Esta ya no es la acción comunitaria que va asociada con la integración política, sino que es una lucha reivindicativa, un modelo "de clase".

Mientras que las ocupaciones de terrenos de fines de los años cincuenta fueron puramente reivindicativas, en este nuevo período las ocupaciones adquieren una significación política; ellas cuentan con el apoyo de los partidos de izquierda en el gobierno y de la extrema izquierda que las hace un elemento de su estrategia de transformación de la estructura social. El planteamiento político resultaba interesante pues no buscaba solamente disputar la clientela política de la democracia cristiana, sino integrar las reivindicaciones de los pobladores a un proyecto político. La reivindicación está a la vez dirigida por el gobierno y en contra de éste, lo que no transcurre sin crear tensiones y considerables ambigüedades. A pesar de todo, se trata más de un conflicto político que de un conflicto de clases pues la oposición con los propietarios de terrenos o los empresarios permanece secundaria.

También se observa una gran correlación entre las ocupaciones de terrenos y los períodos electorales (Duque y Pastrana, 1972). Cada grupo político refuerza su influencia y su implantación cuando el gobierno duda de usar la fuerza contra la izquierda antes de 1970 o contra la extrema izquierda después de esa fecha. Carente de apoyo político, la ocupación de terrenos está destinada al fracaso pues, al ser en principio ilegal, debía ser negociada políticamente; los pobladores están por tanto siempre vinculados a los partidos en este nuevo período, así como lo estuvieron en el precedente. El mecanismo elaborado por la izquierda contra la democracia cristiana se reproduce con la llegada de la izquierda al poder; la extrema izquierda y algunos grupos democratacristianos se convierten en los agentes políticos de las tomas de terrenos (Castells, 1973). Los pobladores son una de las bases de apoyo para quienes quieren entrar al sistema político o para quienes luchan por el gobierno.

En verdad, la práctica del gobierno de Allende no difiere mayormente, en este terreno, de la del gobierno precedente: como lo notara Castells (1973) "son prácticas similares pero de sentido opuesto". El Estado permanece como el agente de la integración pero la ideología de la "participación popular" reemplazó la de la "promoción popular". En todo caso, la búsqueda de legitimidad política sigue siendo importante y el apoyo político más necesario que nunca. A pesar del llamado oficial a la participación de la base, el 60 por ciento de los pobladores creía que sólo el Estado podía cambiar sus condiciones de vida (Vanderschueren, 1971b).

Las estrategias revolucionarias de la extrema izquierda y principalmente del MIR buscaban romper el vínculo de dependencia con el Estado. El carácter ilegal de las ocupaciones de terreno había conducido a estos militantes a pensar que los pobladores constituían la base de una estrategia política revolucionaria, en un momento que los sindicatos parecían apoyar las políticas reformistas. A través del enfrentamiento con el gobierno, la estrategia del MIR consistía en pasar de la reivindicación a la insurrección para desenmascarar el carácter temeroso y represivo de la izquierda en el gobierno, a la vez que acentuar las contradicciones dentro de la Unidad Popular. El MIR comienza entonces un intenso trabajo político cerca de los pobladores, sobre todo dentro del campamento "Nueva Habana", donde habían reunido pobladores "seleccionados" de dos o tres ocupaciones organizadas por el MIR (Lastelain, 1975; Alvarado *et al.*, 1973). Este campamento fue considerado como una base de educación revolucionaria y un laboratorio de vida y decisiones colectivas (Lastelain, 1975). A fines de 1971, en el congreso del campamento Nueva Habana, el MIR da a conocer el inicio de una táctica de oposición a la Unidad Popular. El MIR había decidido desarrollar su acción dentro del sector obrero; los aspectos reivindicativos y de organización comunitaria ejemplar fueron descuidados para privilegiar el trabajo puramente político (Lastelain, 1975; Equipo CIDU, 1972a). La organización interna de Nueva Habana se deteriora: no hay voluntarios para los programas de salud, de educación o construcción, turnos de vigilancia, pocos compran el periódico del campamento. Además, como lo hace notar Lastelain (1975), comienzan a aparecer conflictos entre los pobladores; la cohesión de un grupo que permanecía fuertemente asociado a la acción reivindicativa se encuentra amenazada ahora por la

extrema politización. Las juntas de vecinos son hostiles a una orientación radical que amenaza simultáneamente el éxito reivindicativo y la comunidad.

Dentro de la evolución política de la extrema izquierda, los pobladores son muchas veces considerados como una base poco segura y fueron abandonados en forma bastante rápida en beneficio de una línea más clásica de movilización de obreros y campesinos (Castillo y Larraín, 1971; Zemelman, 1973). La tentativa del MIR y otros grupos de extrema izquierda busca reforzar una lógica de ruptura revolucionaria dentro de un contexto en el que la lucha reivindicativa aliada al Estado sigue siendo posible y donde reina un clima general de "lucha de clases". A pesar del discurso radical, a pesar del llamado a la ruptura y la participación popular, la acción de los pobladores sigue inscrita en un modelo de reivindicaciones y relaciones populistas con el Estado que aparece como el único agente de cambio y "protección" para los grupos marginales. Los pobladores no son la masa revolucionaria que algunos quisieron ver, aunque eran en esos años favorables al desarrollo de tal lógica.

La orientación de ruptura choca también con el apego comunitario. El ímpetu con que crecen las organizaciones comunitarias desde el gobierno de Frei continúa durante la Unidad Popular. Se estima que 800.000 personas se encontraban afiliadas a estas organizaciones (Alvarado *et al.*, 1973). Como los campamentos son más activos y más movilizados que las poblaciones ya consolidadas, como son dirigidos por militantes de los partidos de izquierda en el gobierno, los campamentos se van estabilizando, consiguiendo su equipamiento y convirtiéndose en poblaciones poco a poco. En el curso de este cambio la organización comunitaria se desarrolla dentro de lazos de dependencia con los partidos políticos y la Iglesia católica. Según Vanderschueren (1971b), los pobladores están dominados por una conciencia "dependiente": el adversario social sigue siendo el "rico", describe estas diferencias en términos relaciones de distancia social más que de explotación, y las elites políticas aparecen como las únicas capaces de realizar los cambios necesarios y de ayudar a mantener la unidad del grupo. Esta concepción, en resumidas cuentas totalmente instrumental y dependiente de la política, explica que 70 por ciento de los pobladores se ubiquen al "centro" con posiciones que incluyen matices de derecha, como el respeto del orden y el Estado, pero también con tonos izquierdistas por su voluntad de integración (Aldunate, 1971). Castells (1973), en este mismo período califica los comportamientos colectivos de los pobladores como "economicistas". Esta imagen ciertamente no corresponde a las expectativas de los investigadores y los intelectuales que, influidos por el clima ideológico de esos años, querían ver en los pobladores los agentes de un cambio radical. A través de las organizaciones comunitarias –no obstante la iconografía, las canciones y una atmósfera populista de izquierda, muy bien manejadas por los jóvenes intelectuales de izquierda– la tendencia de la acción comunitaria es al aumento de la participación y no a la ruptura. Las organizaciones de base se mantienen como instrumentos de transmisión política y en la medida que las tensiones políticas son mayores las organizaciones se rompen. Se comprende que para los pobladores que vivieron esa época los recuerdos de la Unidad Popular no estén siempre cargados de nostalgia, pues la hiperpolitización desarrollada por ciertos grupos había fracturado la comunidad y desestabilizado los mecanismos de la reivindicación. A mediados de los ochenta, escaso 6 por ciento de los pobladores deseaba volver a ese período (Rodríguez y Tironi, 1987).

¿Cómo definir analíticamente este complejo período de la historia de los pobladores? La acción reivindicativa se mantiene con el crecimiento del número de tomas, pero ella permanece sometida, tal como en el pasado, a la mediación de los partidos políticos. Por razones más políticas y heterónomas que sociales y autónomas el eje de integración política-comunidad creado por la política de promoción popular se desplaza hacia uno de reivindicación-integración política. Pero este cambio puede ser interpretado tanto como un efecto de los cambios ideológicos en la esfera del gobierno y los partidos, como un desplazamiento autónomo de las prácticas. La gran lección de este período sigue siendo el fracaso de las tentativas de vincular la reivindicación a una lógica de ruptura revolucionaria por agregación de descontento. Esta tentativa fue vencida mayormente por la amenaza que representaba para la vida comunitaria; en efecto, la ruptura revolucionaria rompía con las figuras del populismo en las que se inscribía toda la historia de las luchas de los pobladores.

V. Las protestas

El golpe de Estado de septiembre de 1973 puso fin a la democracia del "estado de compromiso" en Chile, democracia limitada para las masas marginales, pero una democracia que pese a todo ofrecía canales institucionales a las reivindicaciones y garantizaba derechos elementales. El largo esfuerzo por vincular la participación política, la integración social y el desarrollo había sido bruscamente interrumpido o, más precisamente, desarticulado en pro de una regulación social por el mercado, sin democracia. La mezcla de reformismo democrático con estrategias revolucionarias que caracterizó a la Unidad Popular, se probó a fin de cuentas intragable. Se sabe que los pobladores se fueron retractando de esta "vía chilena al socialismo" que aparecía políticamente contradictoria y que no permitía superar las dificultades económicas.

No es cuestión de reconstruir ahora la historia de esta experiencia política y de su interrupción por el golpe de Estado, pero recordemos que desde 1972, el gobierno que siempre fue minoritario se enfrenta con dificultades insuperables. El parlamento, controlado por la democracia cristiana, y el Poder Judicial se oponían cada vez más a los proyectos del Ejecutivo, el cual no controlaba suficientemente las movilizaciones que le sostenían, y en 1973 la Cámara de Diputados vota la inconstitucionalidad del gobierno. Al mismo tiempo, las movilizaciones sociales se exacerban, los servicios paralizan debido a huelgas numerosas e interminables, hostiles o favorables al gobierno, las ocupaciones de fábricas se multiplican, la tasa de inflación alcanza 350 por ciento en el primer semestre. En esta sociedad "sobremovilizada", el Estado es percibido ya sea como el instrumento de un proyecto revolucionario, ya sea como un adversario; las reglas del juego político han desaparecido, los privilegiados están llenos de terror, los sindicatos obreros se apartan de un gobierno que es sinónimo de degradación de las condiciones de vida y el clima de anarquía que se instaura poco a poco favorece las reacciones autoritarias.

Los últimos meses de la Unidad Popular fueron difíciles para los pobladores que afrontaron serios problemas de abastecimiento y la fragmentación de sus comunidades debido a rivalidades políticas. Masa de maniobra disputada por partidos rivales, los pobladores estaban cansados de la extrema politización y muchos de entre ellos recibieron el golpe como un alivio.

Más allá de la Unidad Popular y de un marxismo concebidos como los enemigos principales, el golpe de Estado liquidó también la democracia. La represión suspendió la vida política, controló las universidades, estableció la censura, desmanteló numerosas organizaciones, incluidas las de los pobladores. La clase política entra en una crisis profunda, sea porque ella estuviera asociada a la experiencia de la Unidad Popular, sea porque ella aprobaba el golpe de Estado. La acción militar fue particularmente severa contra los campamentos que representaban, para los militares, una amenaza revolucionaria. Los pobladores fueron víctimas de una represión aguda y prolongada: así mientras los sindicatos ya no estaban prohibidos porque en 1978 fueron inscritos dentro de una ley específica y restrictiva, pero dentro de una ley, las juntas de vecinos de los pobladores fueron prohibidas en 1973 y no pudieron funcionar libremente durante todo el gobierno militar.

Sólo en 1975 el gobierno militar buscó "normalizar" la situación económica con la reducción de la deuda pública, la supresión parcial del control de precios, y el restablecimiento del sistema de propiedad anterior. Pero su tarea era sobre todo represiva, le hacía falta hacer tabla rasa de todo lo que, de cerca o de lejos, evocaba la Unidad Popular; implantó un régimen de terror. En seguida, el gobierno se lanzó a construir un "nuevo Chile" por medio de políticas neoliberales "duras", implementadas por jóvenes ministros, los "Chicago boys". Ellos querían desestatizar la economía, establecer los mecanismos de mercado en todos los dominios posibles, abrir la economía chilena a los intercambios internacionales y a los inversionistas extranjeros. El gobierno se mantenía autoritario, represivo y socialmente conservador, mientras emprendía una "revolución liberal" con vistas a modernizar la economía y reemplazar las regulaciones políticas, corporativas o administrativas por las de un mercado que se abriera libremente a los intereses del "homo-economicus".

En 1980 se hablaba del "milagro económico chileno". No hay duda que la política económica ultraliberal dio un gran dinamismo a la economía chilena. La inflación pasó de 1.000 por ciento en 1973 a 30 por ciento en 1979. El crecimiento se recobra en 1981, la deuda pública se reabsorbe

en 1980; en 1978 las exportaciones son el doble que 1974 y la balanza comercial muestra excedentes. La importación y exportación de bienes de consumo industrial se había convertido en un negocio fructífero, las clases medias del comercio y los servicios compraban gran cantidad de autos, material electrónico y la informatización avanzaba a paso rápido... Pero el milagro tuvo bastantes aspectos sombríos; la deuda externa crecía considerablemente, había escasa inversión en actividades productivas, los equipamientos colectivos se deterioraban por el abandono. Con la apertura al mercado mundial, muchas pequeñas industrias, como la textil, recibieron un duro golpe. Dentro del "milagro", Chile inicia un proceso de desindustrialización, con la caída de la inversión pública la construcción entra en crisis y caen los salarios obreros. En 1982 el "milagro económico" cede su lugar a una recesión extremadamente brutal, mucho más fuertemente sentida ya que el Estado no juega el papel amortiguador que tuviera anteriormente. La tasa de cesantía alcanza 25 por ciento y el nivel de vida cae brutalmente, acrecentando las desigualdades sociales. Los esfuerzos de "legalización" del régimen con la Constitución de 1980 y la puesta en marcha del Plan Laboral ya no estuvieron más afianzados por la prosperidad que fuera hasta 1981 el principal elemento de legitimidad del gobierno.

Los más pobres fueron, evidentemente, los más duramente tocados por esta recesión, pero no son los pobladores quienes toman la iniciativa de las protestas. La Coordinadora Nacional Sindical organiza las primeras manifestaciones masivas contra el gobierno. La iniciativa compromete a las organizaciones que han sobrevivido bajo la dictadura, los sindicatos que han mantenido estructuras y redes autónomas como lo manifiesta el fracaso del sindicalismo oficial, los militantes políticos y las organizaciones "protegidas" por la Iglesia. La acción reivindicativa de los pobladores está débilmente reconstituida debido a los estrechos canales institucionales que están abiertos; en 1980 una delegación de pobladores se ha entrevistado con el ministro de la Vivienda, en 1981 un intento de ocupación de terrenos ha movilizado unas seiscientas familias. El gobierno no negocia, pero responde indirectamente a ciertas demandas anunciando un programa de construcción de viviendas. A pesar de todo, la represión continúa siendo la regla, erradicando pobladores hacia nuevas poblaciones que refuerzan la "frontera interior".

Los sindicatos y las organizaciones profesionales llamaron a las primeras protestas a las que se suman los pobladores cuyas organizaciones de ninguna forma tuvieron la iniciativa. Los partidos políticos aprovechan entonces la brecha abierta para acrecentar su capacidad de intervención. De hecho, las protestas se dirigen también a los partidos políticos que debieron dar forma a la "demanda democrática" del país. Más allá de la expresión de descontento económico, los pobladores que participan en estas jornadas desean que se logre la unidad del pueblo capaz de ofrecer una alternativa a fin de que se reabra el proceso de negociación. Posteriormente, las protestas populares se desplazaron hacia los barrios periféricos, donde la lógica comunitaria recubriría la demanda de apertura política. La firmeza del gobierno y las dificultades económicas habían llevado al actor de las protestas a replegarse sobre sí mismo. La iniciativa compromete entonces a los jóvenes al momento que surgen las barricadas y los comandos de protesta.

Un congreso nacional de pobladores en abril de 1986 reúne unos trescientos delegados de diversas poblaciones de Santiago. La esperanza común era constituir una organización unitaria sobre la base de reivindicaciones elementales de los pobladores; pero salieron decepcionados. A primera vista, este fracaso puede ser interpretado en términos políticos, pues todas las tendencias presentes se aliaron contra los comunistas, que perdieron así el control de la coordinación; la extrema diversidad del movimiento de pobladores no le permite superar las divisiones políticas. Falta, no obstante, agregar otra interpretación pues la nueva coordinación surgió por una fuerte presión antiinstitucional ejercida por los delegados de base; había también una gran desconfianza en el encuentro con la política, una gran sensibilidad comunitaria frente a la cual el partido comunista aparece como la encarnación del sectarismo y la pura lógica política. El repliegue hacia la acción comunitaria y la protesta moral, la dificultad para vincular las reivindicaciones a una apertura política ocuparon el centro de la investigación de la cual surge esta interpretación de la historia social de los pobladores.

Conclusión

Podrá sorprender que la representación de la historia de un sector social pueda ser organizada en función de criterios políticos y que no remita al desarrollo de los cambios y crisis urbanas, etapas de transformación estructural, o etapas de modernización. Esta elección está justificada porque el rol de los componentes reivindicativos estables se desarrolla y se repliega en función del contexto político, de las estrategias del Estado que definen los mecanismos institucionales y la oferta de recursos. La acción de los pobladores no queda definida por la oposición a los propietarios, los transportistas u otros grupos sociales, sino que ella es dependiente del Estado y de los partidos. Pero en lo que concierne a los pobladores, tal heteronomía, esta dependencia y, tal vez clientelismo, son reforzados por la estructura misma de su acción. El arreglo interno de los componentes de la acción de los pobladores, la jerarquía de los cuatro componentes está impuesto indirectamente, no en la forma de manipulación, sino por estrategias políticas o estatales sobre las cuales los pobladores no ejercen sino un control muy débil. Además, los agentes exteriores permiten vincular estas dimensiones de la acción, por lo que el movimiento siendo importante es también dependiente, mientras las significaciones se separan, más se autonomiza el movimiento de pobladores, pero su capacidad de acción se debilita y se produce la separación entre sus aspectos instrumentales y expresivos.

En términos sociológicos, la historia de los pobladores podría resumirse de la manera siguiente (A = acción reivindicativa, B = participación populista, C = acción comunitaria, D = lógica de ruptura).

- El período de las primeras ocupaciones de terrenos, principalmente la de La Victoria, está dominada por una lógica puramente reivindicativa; la institucionalización no es en sí un objetivo, sino la condición de éxito de la reivindicación. Igualmente, la comunidad es más un recurso de la reivindicación que un objetivo de la acción. Nada indica que haya en este período una lógica de ruptura. El orden de la acción es por tanto A-B-C: La reivindicación subordina la participación institucional y la comunidad.

- El segundo período, de la promoción popular, se caracteriza por la importancia de la iniciativa institucional y política y por un esfuerzo autónomo y heterónomo de la organización comunitaria. La lógica reivindicativa existe siempre, pero ella se canaliza a través de la política de institucionalización o bien ella se asocia a la lógica crítica de los partidos de izquierda que buscan cambiar la naturaleza del sistema. La jerarquía de los componentes de la acción es por lo tanto: B-C-A-D: El sistema institucional se relaciona de modo populista con la comunidad, subordinando de esta forma la reivindicación, aunque ésta aparece embrionariamente vinculada con acciones de ruptura bajo un sello de autonomía clasista.

- El período de la Unidad Popular está dominado por la asociación de un lógica reivindicativa, bautizada como participación popular, y también por la mantención de la institucionalización. El esfuerzo se desplaza a los campamentos, la acción comunitaria pasa a un segundo plano, mientras que la lógica de ruptura se autonomiza con experiencias como Nueva La Habana. Pero permanece en el marco de una política nacional-populista y la lógica de ruptura va como "al lado" del modelo general que se puede representar de la siguiente forma: B-A-C (D): El sistema institucional intenta responder y canalizar las demandas de los grupos de pobladores organizados, cuya vida cotidiana aparece opacada por la política; la lógica de ruptura no aparece vinculada ni a los procesos reivindicativos ni a la vida comunitaria.

- La acción de los pobladores durante los años 80 se organiza sobre la base de la crisis de la acción reivindicativa y la institucionalización; la prioridad otorgada a los sentimientos comunitarios es, de forma minoritaria pero real, cercana a las fuerzas de ruptura revolucionaria. La jerarquía de componentes se enuncia así: C-D-B-A. La vida cotidiana de la comunidad, muy cercana de la acción revolucionaria –las estrategias de sobrevivencia familiares tienen su complemento en los hijos guerreros– pero aun conectada con formas de acción institucional o reivindicativa, que aparecen como un horizonte antes que como certeza.

Esta historia –que no tiene nada de historia "natural", con etapas "necesarias"– no es la de un movimiento que se fortalece o degrada al margen del cambio social. Esta historia no puede concebirse sino a partir de la imagen que surge de la acción colectiva de los pobladores, donde éstos se constituyen como actor y movimiento social.

Notas

(1) Más antecedentes sobre este apartado en Espinoza, 1988.

(2) La forma típica del conventillo es la de una antigua casa subdividida para su arriendo por piezas. También es asimilable al conventillo un tipo de construcción conocida como *cité*, compuesta por un conjunto de pequeñas viviendas adyacentes, nucleadas en torno de un corredor común.

Referencias

Aldunate, A. (1971): "Participación y actitud de los pobladores ante las organizaciones poblacionales. Una aproximación a la heterogeneidad popular". *Documento de Trabajo* ELAS-FLACSO.

Alvarado, L.; R. Cheetman y G. Rojas (1973): "Movilización social en torno al problema de la vivienda". En Revista *EURE* N° 7.

Campero, G. y J.A. Valenzuela (1984): *El movimiento sindical en el régimen militar chileno. 1973-1981*. Santiago: Estudios ILET.

Castells, M. (1973): "Movimiento de Pobladores y Lucha de Clases", en *Revista EURE*. N° 7. Santiago.

Castillo, F. y J. Larraín (1971): "Poder Obrero y Campesino y Transición al Socialismo en Chile". *Cuadernos de la Realidad Nacional* 10 (diciembre), Santiago.

Dubet, F.; E. Tironi, V. Espinoza y E. Valenzuela (1989): *Pobladores: Luttes sociales et democratie au Chili*. Paris: L'Harmattan.

Duque, J. y E. Pastrana (1972): "La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile, 1964-1972." Santiago. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales* N° 4.

Equipo CIDU (1972a): "Reivindicación urbana y lucha política. Los campamentos de pobladores en Santiago de Chile". *Revista EURE* vol. III, N° 6. Santiago.

Espinoza, V. (1993): "Pobladores y participación. Entre los pasajes y las anchas alamedas". *Proposiciones* 221988 *Para una historia de los pobres de la ciudad*. Santiago: Ediciones SUR, Colección Estudios Históricos.

Garretón, M.A. (1983): *El proceso político chileno* Santiago: FLACSO.

Lastelain, C. (1975): Histoire du 'campamento' Nueva Habana, Chile. Espaces et Société Num 15 Avril.

Martínez, J. y E. Valenzuela (1986): "Juventud popular y anomia". *Revista de la CEPAL* 29: 173-83.

Mercado, O.; P. de la Puente y F. Uribe (1970): *La marginalidad urbana: origen, proceso y modo. DESAL*. Buenos Aires: DESAL-Troquel.

Palma, E. y A. Sanfuentes (1979): "Políticas estatales en condiciones de movilización social. Las políticas de vivienda en Chile 1964-1973". *EURE* vol. VI, N° 16 (octubre).

Razeto, L. (1990): *Economía popular de solidaridad. Identidad y proyecto en una visión integradora*. Santiago: Area Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Chile.

Rodríguez, A. y E. Tironi (1987): "Veinte años de las poblaciones de Santiago." *Proposiciones* 14 (agosto):24-43. Santiago: SUR.

Sabatini, F. (1982): "Santiago: Sistemas de pro-

ducción de viviendas, renta de la tierra y segregación urbana". *Documento de Trabajo* N° 128. Santiago, Instituto de Planificación del Desarrollo Urbano, Universidad Católica de Chile.

Valdés, T. (1983): "El problema de la vivienda: Políticas estatales y movilización popular" *Documento de Trabajo* N° 195. Santiago: FLACSO

Vanderschueren, F. (1971a): "Significado Político de las Juntas de Vecinos" *Revista EURE* vol. I, N° 2, julio. Santiago.

_____ (1971b): "Pobladores y Conciencia Social". *Revista EURE* vol. I, N° 3 (octubre).

Zemelman, H. (1973): "Significación del Poder Popular". *Cuadernos de la Realidad Nacional* N° 17 (abril). Santiago.